

## SESIONES ORDINARIAS

2011

## ORDEN DEL DÍA N° 1939

COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA  
DE CUENTAS

Impreso el día 2 de marzo de 2011

Término del artículo 113: 15 de marzo de 2011

SUMARIO: **Pedido** de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su informe, sobre la verificación de la coordinación y el control ejercido por el ETOSS respecto de los procesos de implementación y administración del Programa Tarifa Social y cuestiones conexas.

1. (8.663-D.-2010.)

2. (350-O.V.-2005.)

I. Dictamen de mayoría.

II. Dictamen de minoría.

## I

## Dictamen de mayoría

*Honorable Cámara:*

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente oficiales varios O.V.-350/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre un informe referido a verificar la coordinación y el control ejercido por el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) respecto de los procesos de implementación y administración del Programa de Tarifa Social y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

## Proyecto de resolución

*El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación*

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas para:

a) regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su informe sobre la verificación de la coordinación y el control ejercido por el ETOSS respecto de los procesos de implementación

y administración del Programa Tarifa Social; así como para determinar y

b) efectivizar las responsabilidades que pudieran haber emergido de las aludidas situaciones.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría General de la Nación, conjuntamente con sus fundamentos.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010

*Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A. Juez. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – Walter A. Agosto.*

## II

## Dictamen de minoría

*Honorable Cámara:*

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente oficiales varios O.V.-350/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre un informe referido a verificar la coordinación y el control ejercido por el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) respecto de los procesos de implementación y administración del Programa de Tarifa Social y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente:

## Proyecto de resolución

*El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación*

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su informe sobre la verificación de la coordinación y el control ejercido por el ETOSS respecto

de los procesos de implementación y administración del Programa Tarifa Social.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010

*Nicolás A. Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José M. Díaz Bancalari.*

## FUNDAMENTOS

Por estas actuaciones se informa sobre la auditoría que llevase a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN) con el objeto de verificar la coordinación y el control ejercido por el ETOSS respecto de los procesos de implementación y administración del Programa Tarifa Social. El período auditado comprendió desde el 1° de enero de 2001 al 30 de junio de 2004.

La tarea realizada arrojó los siguientes comentarios y observaciones:

1. No se realizó una difusión sostenida del PTS, con el fin de dar a conocer a los usuarios los beneficios que otorga el Programa.

El Concesionario no realizó una difusión sostenida del PTS, con el fin de dar a conocer su implementación, el cual consiste en un subsidio para aquellos usuarios que presentan inconvenientes en el pago del servicio de aguas y cloacas.

Conforme surge del análisis del expediente 13.602/02 (cuerpo 3, folio 446/451) AASA plantea, entre otros aspectos, la modalidad y contenido de la comunicación a los usuarios respecto del Programa en cuestión.

El ETOSS por nota 14.763 de fecha 16 de abril de 2002 le responde al concesionario sobre varios temas relacionados con el PTS, sin embargo no se expidió (aprobando o modificando) sobre el tema comentado en el párrafo anterior. Por nota AASA 41.281, de fecha 8 de agosto de 2002, la empresa comunica al ente que la única información relacionada con el PTS, que Aguas Argentinas S. A. puso a disposición de los clientes, es el folleto explicativo remitido por nota AASA 35.602/02.

Respecto de esto último, corresponde señalar que sólo al inicio de la puesta en marcha del programa, la empresa remitió a los usuarios del servicio junto con la factura el folleto explicativo.

De esta correlación de información se desprende que los usuarios de la Concesión no fueron puestos en conocimiento a través de publicidad sostenida (radio, TV, gráficos, folletos, etcétera) de los beneficios otorgados por el Programa.

2. Los subsidios otorgados por el Programa de Tarifa Social en el período 2001 a 2004 fueron menores

a los previstos por el acta acuerdo del 9 de enero del año 2001.

Las previsiones iniciales del acta acuerdo del 9 de enero de 2001 fijaron para el Programa de Tarifa Social un monto anual de \$ 4.000.000. Su aplicación se acordó a partir del 1°/7/01. El Ente fijó el monto disponible para el año 2001 en \$ 2.000.000. El monto fijado a partir del año 2002 fue establecido en \$ 4.176.000 anuales que, en términos de módulos de \$ 24 cada uno, implica una disponibilidad anual de 174.000 módulos.

Durante el año 2001 no se otorgaron subsidios y en el año 2002 fueron otorgados por un equivalente a 35.606 módulos (cuadro I del anexo II), cifra menor a los módulos disponibles según las sumas previstas en la normativa.

Los nuevos beneficiarios incorporados durante el año 2003 representaron 75.110 módulos. Sumando a éstos los beneficios otorgados el año anterior de 35.606 módulos, se llega a una cifra levemente superior a los 110 mil módulos, valor que refleja el total de subsidios otorgados en el año 2003. Este aumento sin embargo se debe, en parte, a la incorporación al programa de las instituciones sin fines de lucro, y a la instrumentación de los planes de pago destinados a regularizar la deuda que los usuarios mantenían con la empresa al momento de su incorporación al programa.

La resolución ETOSS 112 del 25 de septiembre de 2003 reglamentó esta última operatoria, cuya ejecución efectiva se inició el 22 de diciembre del 2003 y se extendió a aquellos usuarios que solicitaron su incorporación en forma espontánea. La resolución ETOSS 5/04 por su parte dispuso que aproximadamente la mitad del saldo no utilizado del programa al 31 de diciembre del año 2002 se provisione para aplicarlo a dicho plan.

En el año 2004 ingresaron nuevos usuarios al programa por un equivalente a 75.332 módulos según se puede calcular en base a los cuadros I y II del anexo II. En los seis primeros meses del año los módulos otorgados ascendieron a 42.036.

Los subsidios otorgados en el período 2001 a junio de 2004 alcanzaron, en consecuencia, el equivalente a 299.074 módulos. Este valor representa apenas el 58 % de los 518.333 módulos disponibles en ese período. Si en cambio se toma en cuenta el período 2001 al 31/12 del año 2004, estos números son los siguientes: módulos otorgados 332.370; módulos disponibles 605.333, representando el 55 % de estos últimos.

Con respecto a los fondos disponibles para el programa debe señalarse que \$ 2.500.000 fueron aplicados a la adquisición de bombas depresoras de napas y equipos accesorios, de acuerdo a lo dispuesto en el convenio de fecha 13 de setiembre de 2002, con el objeto de neutralizar y revertir el fenómeno del ascenso de las napas freáticas en la provincia de Buenos Aires y el GCBA. Si se computan estos gastos como ejecución del programa, los porcentajes arriba mencionados pasan a ser, respectivamente, 78 % y 72 %.

3. Los beneficiarios del Programa de Tarifa Social percibieron una proporción muy reducida de los fondos provisionados contablemente con este fin por la empresa en el período 2001 y 2003.

Atento a los considerandos de las Resoluciones ETOSS 02/02; 05/04 y 130/04, la empresa realizó provisiones contables con cargo al Programa de Tarifa Social por \$ 2.000.000 en el ejercicio 2001 y por \$ 4.176.000 para los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Sin embargo, en el ejercicio 2002 la empresa declara que los descuentos en conceptos de subsidios imputados a la factura con vencimientos operados hasta el 31/12/02 ascendieron apenas a la suma \$ 85.000, monto que equivale a 3.542 módulos de subsidio y que representa el 1,4 % del monto provisionado a ese año (ejercicios 2001 y 2002).

En el año 2003, por su parte, la empresa registra por el mismo concepto la suma de \$ 1.654.000 y además, \$ 2.000 por la instrumentación de los planes de pago destinados a regularizar la deuda que los usuarios mantenían con la empresa al momento de su incorporación al programa. La suma de dichos montos representan el 40 % del total provisionado por la empresa en dicho ejercicio.

Los descuentos realizados en la factura de los usuarios en concepto de subsidio más los atribuidos a los planes de pago en el período 2001-2003 sin embargo alcanzaron una cifra relativamente baja: sólo el 17 % del total provisionado por AASA en ese lapso. Dicha proporción sube al 41 % cuando se agregan los \$ 2.500.000 destinados a la adquisición de bombas depresoras de napas freáticas.

A la fecha de cierre de las tareas de campo, AASA no había presentado aún los informes correspondientes al ejercicio 2004. Por su parte la empresa, disminuyendo el monto provisionado, contabiliza \$ 2.500.000, suma aplicada a la adquisición de las bombas depresoras de napas freáticas.

4. El ente no cumplió en tiempo y forma lo establecido en el anexo 2, incisos g) y j) del acta acuerdo suscrita el 9 de enero de 2001.

Respecto de lo acordado en el inciso g), el “caso social” surge desde el inicio del programa según acta acuerdo de fecha 9 de enero de 2001, con tal motivo se debía constituir una comisión ad hoc integrada por el ETOSS y la concesionaria que se debía expedir en el plazo de 90 días respecto de la determinación de los “casos sociales” y sus consecuencias. Dicha comisión nunca se constituyó.

Por otra parte, el Ente Regulador recién procedió a realizar alguna determinación del “caso social” mediante el dictado de la resolución ETOSS 112 de fecha 27 de octubre de 2004.

Respecto al inciso j), (reglamentación del PTS), se observó que el ETOSS realizó su reglamentación mediante la resolución ETOSS 2 de fecha 9 de enero

de 2002, transcurridos aproximadamente nueve meses desde la fecha prevista para su reglamentación.

5. El ente no ha constituido formalmente el Foro de Participación creado por resolución ETOSS 02/02, Anexo III.

Si bien, con fecha 10 de marzo de 2005 el ETOSS manifiesta haber desarrollado tareas inherentes al citado foro, mediante la coordinación de temas referidos a la implementación, ejecución, modificaciones y ajustes en el avance del programa entre el ente y los municipios de la provincia de Buenos Aires del área de la concesión, autoridad de aplicación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gobierno de la provincia de Buenos Aires, asociaciones de usuarios, Comisión de Usuarios del ETOSS, el Foro de Participación no ha sido constituido formalmente.

6. El ente y los municipios no dieron cumplimiento a la cláusula undécima de los convenios suscritos entre ambas partes.

La citada cláusula determina que “A efectos de la atención permanente del desarrollo de este Convenio y del Programa en él determinado y al margen de lo establecido en la cláusula 10) el municipio y el ETOSS nombrarán cada uno antes de los 10 (diez) días de rubricado el presente un titular y un suplente para conformar una comisión de seguimiento de este convenio, encargada de canalizar todas las inquietudes que se planteen en el desenvolvimiento del mismo.”.

El Ente, en respuesta al requerimiento efectuado por esta auditoría con fecha 3 de diciembre de 2004, manifiesta que “Dichas comisiones integradas por la Comisión Ejecutiva y un representante de cada municipio, no se ha constituido formalmente, la dinámica del programa determinó que las problemáticas de cada distrito se analizan y resuelven en interacción directa sin constitución ni funcionamiento formal de dichas comisiones.”.

Asimismo, el Ente no arbitró los medios conducentes a las modificaciones de los convenios, a fin de adecuarlos a la dinámica del Programa.

7. El Ente no intimó a los municipios a dar cumplimiento a las cláusulas tercera (apartado c), sexta (primer párrafo) y decimocuarta de los Convenios suscritos.

Los Convenios suscritos entre el ETOSS y los municipios tienen como objeto establecer la modalidad de participación y la responsabilidad de estos últimos en lo concerniente a la selección e identificación de los beneficiarios de la Tarifa Social. Cada Convenio, entre otros aspectos determina:

–“El municipio deberá [...] informar al ETOSS sobre la asignación e integración de la unidad ejecutora del programa.” [(Cláusula Tercera, apartado c)].

“Una vez aprobado el beneficio por el municipio, este deberá informar al ETOSS remitiéndole los antecedentes en virtud de los cuales se aprobó el correspondiente beneficio...” (primer párrafo de la Cláusula Sexta).

–“El presente convenio será puesto dentro de los (quince) 15 días de su firma a consideración del Honorable Consejo Deliberante o de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su caso, para su homologación.” (Cláusula decimocuarta)

En cuanto a la obligación emergente de la cláusula tercera, apartado *c*), se señala que, salvo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que remitió la resolución 230-SSCPSI-2002 de fecha 5/9/02 (Expte. ETOSS 13.602/02) y Lomas de Zamora que envió los decretos 913/02 y 161/04 de fechas 11 de julio de 2002 y 13 de febrero de 2004, respectivamente, el resto de las jurisdicciones no remitió el acto administrativo de asignación e integración correspondiente.

Respecto de este incumplimiento, el Ente manifiesta, que en el resto de las unidades ejecutoras se implementaron de hecho de acuerdo a la lógica de funcionamiento de cada municipio.

En cuanto al primer párrafo de la cláusula sexta los municipios no remitieron los antecedentes de los beneficios aprobados para usuarios ni la totalidad de la documentación correspondiente a las instituciones.

Con relación a las homologaciones, el convenio firmado con cada municipio debía entrar en vigencia una vez refrendado por el Consejo Deliberante o la Legislatura en el caso del GCBA.

Solicitada la documentación pertinente, el ente sólo remitió el convenio homologado del municipio de Lomas de Zamora.

Con respecto al GCBA se verificó que el convenio fue girado a la Legislatura con un proyecto de ley, en el cual se propone aprobarlo (no consta fecha de envío).

8. El ente no reglamentó la modificación introducida a los procedimientos establecidos en la resolución ETOSS 02/02, anexo II y en la resolución 10/03, anexo I.

Las citadas resoluciones establecen que “Los listados deberán ser remitidos con la firma del responsable del área ejecutora y con el correspondiente soporte magnético”.

Los listados de beneficiarios remitidos al ETOSS se dividen en dos grupos, los remitidos por las Jurisdicciones (Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y municipios de la provincia de Buenos Aires del área de la concesión) y aquellos remitidos por las ONG.

En el inicio de la ejecución del programa las jurisdicciones remitían los listados con soporte magnético y con nota de presentación. Sin embargo, no todos se encontraban conformados por la máxima autoridad de la dependencia designada como unidad ejecutora.

Con el propósito de agilizar la inclusión de los usuarios al beneficio, el ente acordó informalmente con cada jurisdicción la remisión de los listados por correo electrónico de acuerdo a los formatos y especificaciones por él determinadas.

Cuando se trata de instituciones, las jurisdicciones remiten la documentación al Ente para su análisis y

archivo. A la fecha de cierre de tareas de campo la modificación acordada al procedimiento no se encuentra reglamentada.

9. El ente no ha programado ni ejecutado auditorías del desenvolvimiento del PTS.

El ente regulador no ha dado cumplimiento a lo establecido en el Anexo III de la resolución ETOSS 02/02 ni a lo estipulado en la cláusula novena del Convenio de Participación para la implementación de la Tarifa Social, suscrito con los municipios.

El Equipo Técnico, en colaboración con la Comisión Ejecutiva, ha efectuado en las jurisdicciones sólo controles aleatorios de manera informal y sin informe escrito, juntamente con las actividades de capacitación y asistencia que habitualmente se llevan a cabo con las Unidades Ejecutoras de los municipios.

Asimismo, el Ente no realizó auditorías en forma sistemática respecto de los mecanismos y procesos establecidos.

10. Las actividades de capacitación y asistencia llevadas a cabo por el Equipo Técnico a los municipios, no alcanzaron los objetivos para las cuales fueron implementadas.

La Comisión Ejecutiva y el Equipo Técnico, ante la necesidad de procesar e interpretar correctamente los datos de la población beneficiaria del PTS, definieron a través de un instructivo, un conjunto de datos mínimos e indispensables a informar tanto en la encuesta social como en las planillas de envío de información al programa por parte de los municipios.

El objetivo del mismo consiste en facilitar y homogeneizar la comprensión de las variables y sus respectivos indicadores que conforman la encuesta social a efectos de minimizar el nivel de subjetividad de los encuestadores.

El Ente capacitó a cada unidad ejecutora del municipio, en el alcance de las resoluciones que norman el programa, el criterio de otorgamiento del beneficio, la utilización de la encuesta social, los objetivos del programa, además proveyó el modelo de planilla en soporte magnético para el envío de los listados de beneficiarios y uso del correo electrónico. La capacitación se realizó a través de talleres, reuniones informativas, instructivos y clases específicas del manejo de las herramientas informáticas.

Sin embargo, de las verificaciones in situ efectuadas en los municipios seleccionados, se ha detectado que:

a) Los encuestadores no registran la totalidad de los datos requeridos en el instructivo y en algunos casos hay ausencia total de ellos.

b) El personal afectado a la realización de las encuestas por parte de las jurisdicciones no reúne la calificación necesaria para relevar los datos requeridos.

c) No se realizan tareas de campo ni informe socioambiental en aquellos casos en que se otorga más de un módulo, así como tampoco cuando la factura es



superior a los \$ 26 (casos de excepción), de acuerdo a lo requerido en el instructivo.

d) Los datos volcados en las encuestas no se encuentran debidamente acreditados, lo cual impide determinar la veracidad de lo declarado.

e) Usuarios que declararon enfermedades y no adjuntaron las constancias médicas correspondientes.

f) Instituciones tratadas como usuarios.

Lo precedentemente detallado evidencia que las actividades de capacitación encaradas por el ente no arrojaron el resultado esperado. Esta situación no fue advertida por el ente, atento la ausencia de controles pertinentes respecto del desenvolvimiento del programa.

11. El ente no resguarda debidamente la información que remiten las jurisdicciones respecto de los beneficiarios del programa.

El envío de los listados con los beneficios otorgados por las jurisdicciones, como ya fue comentado en la observación 4.8, es efectuado vía correo electrónico, salvo el GCBA y el municipio de San Isidro que lo presentan en soporte magnético.

Cuando son presentados en soporte magnético el ente ingresa la información, en él contenida, a su base de datos reintegrando el soporte al municipio sin efectuar copia del mismo.

En cuanto a los listados remitidos vía correo electrónico se señala que si bien quedan guardados en la memoria de la computadora, el ente no efectúa el resguardo informático correspondiente.

La información remitida por ambas vías tampoco es preservada en soporte documental.

Lo expuesto denota la falta de confiabilidad que surge del circuito implementado por el ETOSS.

12. Se han renovado beneficios otorgados sin analizar el estado actual de cada uno de los beneficiarios.

La resolución ETOSS 02/02, estipula que la duración del subsidio será de un año a partir de la primera factura emitida con el correspondiente descuento.

El Ente admitió la renovación automática de los beneficios, hasta tanto el Concesionario concluyera la puesta en marcha del procedimiento de regularización de deudas anteriores al ingreso del Programa (resolu-

ción ETOSS 112/03), mediante el envío de los correspondientes planes de pago por correo a los usuarios que se encuentran comprendidos en la citada resolución. (Informe del Equipo Técnico en respuesta a las notas UNIREN 240 y 241/04 -AS 176/04)

Lo expuesto por el Equipo Técnico no excluye la responsabilidad, inherente al ente, de controlar la correspondencia de la continuidad o baja de los beneficiarios del programa, por posibles modificaciones en las condiciones económicas y sociales que originariamente lo hicieran acceder al mismo.

La omisión por parte del ente de las verificaciones pertinentes puede generar la utilización de módulos de descuento en beneficiarios que han dejado de estar dentro de las variables que sustentan el mismo, impidiendo que sean reasignados a otros usuarios que acrediten debidamente los requisitos para ser incorporados.

El sistema descripto generaría que con el transcurso del tiempo los recursos resulten insuficientes para atender a los usuarios que deban ingresar al programa, lo que queda demostrado en el cuadro II del anexo II.

Es importante destacar que las bajas que se produjeron responden a motivos tales como: cambios en la situación económica, fallecimiento y/o mudanzas del titular del beneficio. Las mismas fueron informadas por el propio usuario y no surgen como evaluaciones que debería haber realizado el Ente Regulador.

13. Se otorgan beneficios por “casos de excepción” sin estar debidamente fundamentados. El tratamiento de la encuesta no es homogéneo para todos los casos.

El anexo I (especificaciones del beneficio), punto f) de la resolución ETOSS 02/02, establece que: “Para casos de excepción se podrán aplicar módulos enteros de subsidio adicionales, bajo la condición que el monto a abonar sea mayor a 0. Estos casos se tratarán en forma diferencial debiéndose contar con un informe socio ambiental del Equipo Técnico para su aplicación” y el punto 4 del mismo anexo y resolución (casos de excepción): “La excepción deberá estar debidamente fundamentada y contará con el análisis y revisión detallada de los casos por parte del Equipo Técnico”.

De los casos analizados surge que:

a) Respecto de la cantidad de módulos asignados y aprobados, durante el período auditado:

<i>Módulos asignados y aprobados por ETOSS</i>	<i>Cantidad de casos</i>	<i>Porcentaje sobre la muestra</i>	<i>Informe socio ambiental % incumplimiento</i>
1(1)	113	17,22%	No se requiere
Más de uno(2) (casos de Excepción)	543	82,78%	100 %

<sup>1</sup> Ante el otorgamiento de un módulo no corresponde efectuar el informe socioambiental.

<sup>2</sup> Ante el otorgamiento de más de un módulo corresponde efectuar el informe socioambiental

*Nota:* El ETOSS no envió los 34 casos fallantes sobre la muestra seleccionada, debido a que no se encuentra en el Organismo la documentación correspondiente.

Como se desprende del cuadro precedente, el 100 % de los casos de excepción no cuentan con el respectivo informe del Equipo Técnico.

b) En un 92,07 % el encuestador no recomienda la cantidad de módulos a asignar.

Si bien el instructivo no contempla la obligatoriedad de la mencionada recomendación, la ausencia de un criterio uniforme resta homogeneidad a la información volcada en la encuesta.

c) El 26,67 % de las encuestas, no informa la relación que tiene el solicitante con el titular.

d) El 9 % de las encuestas no posee fecha de realización.

e) Un 42,68 % de las encuestas carece de la firma del encuestador.

f) En un 70,58 % no es presentado el recibo de haberes, o constancia de percepción de ser beneficiario de un Plan Social.

g) En un 28,35 % no se acompaña fotocopia del D.N.I.

h) En el 90,52 % de las encuestas se declaran enfermedades y no presentan la correspondiente documentación respaldatoria.

i) La numeración de las encuestas no tiene correlatividad con la fecha de su realización a pesar de que en todos los casos los números fueron puestos por el Equipo Técnico.

A modo de ejemplo se cita: Encuesta 2.860 de fecha 25 julio de 2002 y encuesta 2.877 de fecha 23 de julio de 2002.

j) De la documentación analizada surge también que ante casos similares se otorgan diferentes cantidades de módulos.

Si bien no surge de la resolución ETOSS 02/02 la obligatoriedad de adjuntar a la encuesta como soporte documental el recibo de haberes o certificación de ser beneficiario de un Plan Social, la ausencia de esta documentación, así como la falta de incorporación de la fotocopia del DNI, resta transparencia a los antecedentes que debe proveer el aspirante al programa.

14. No se aplica un criterio uniforme para registrar los datos en los informes socioambientales correspondientes a casos de excepción (caso social).

Desde el comienzo de la ejecución del PTS el Ente detectó que la demanda estaba compuesta, en un alto porcentaje, por los denominados “nuevos pobres”, en especial en los Distritos de la provincia de Buenos Aires donde el área servida no incluía a los sectores más pobres de la sociedad. Por esta razón diseñó una encuesta social adicional que tendía a agilizar el trámite de inclusión en las jurisdicciones, pero que nunca se implementó.

Sobre los diez (10) casos remitidos a modo de ejemplo por el Ente, que han sido tratados específicamente como “caso social” y en los cuales consta el

informe socio ambiental, se obtuvieron las siguientes evidencias:

–El 70 % de los casos no posee la recomendación del profesional que lo realizó, respecto a la cantidad de módulos a asignar.

–El 20 % de los informes poseen únicamente el número de encuesta, sin adjuntar las mismas.

–En el 10 % de los casos se adjunta la encuesta sin numeración.

–El 20 % no identifica el número de cuenta contrato del usuario.

–El 100 % de los informes socioambientales así como el 50 % de las encuestas, no determina la fecha de realización.

El 50 % de las encuestas no tienen firma del encuestador.

El 40 % de las encuestas analizadas no son acompañadas de la documentación respaldatoria correspondiente.

15. El Ente Regulador no exige el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución ETOSS 10/03.

La citada resolución en el Anexo I, establece requisitos a cumplir para la inclusión de instituciones sin fines de lucro.

Desde la incorporación de las instituciones al PTS (29/1/03) se otorgaron en los municipios seleccionados en la muestra 6.078 módulos (296 instituciones), los que se encuentran distribuidos según el siguiente detalle:

Municipios	Módulos otorgados en el período 29/1/03 al 30/6/04	Módulos otorgados con doc.
GCBA	2286	1851
La Matanza	72	17
Lanas	1483	1075
Lomas de Zamora		
San Isidro	994	1048
Tigre	110	20
Tres de Febrero	1133	1064
Total	6078	5075

Del análisis de la documentación respaldatoria de las altas de instituciones surge que:

–La documentación remitida por los municipios responde al 83,50 % de los módulos otorgados por ellos.

–En el 100 % de los casos (sobre los 248 instituciones beneficiadas) el Ente asigna y aprueba el beneficio sin que las mismas hayan cumplido con la totalidad

de los requisitos establecidos en la resolución ETOSS 10/03.

—En el 23 % de los casos la documentación respaldatoria consiste sólo en una factura de servicios de la institución.

—En el 3 % de los casos se asignaron módulos cuyo total supera el 50 % de la factura emitida por el concesionario para esa institución.

Respecto de esto último se señala que el Ente manifiesta, en respuesta a lo requerido por nota AGN 160/04, que "... el control de la asignación lo realiza, en el Concesionario, la Auditoría externa...".

Lo expuesto evidencia que el Ente asigna y aprueba los beneficios otorgados por el municipio sin efectuar la correspondiente evaluación, delegando en el concesionario la responsabilidad que a él le compete.

16. La documentación remitida por los municipios al Ente, referida a las instituciones que ingresan al programa, no se encuentra debidamente archivada dificultando su individualización.

Al momento de la verificación in situ la documentación remitida por los municipios referida a las instituciones se encontraba en total desorden, sin respetar ninguna metodología de archivo. Tal situación, además de dificultar su individualización, facilita el extravío de la misma.

El proyecto de Informe de Auditoría fue comunicado al Organismo auditado mediante nota 104/05-CSCERyP de fecha 6 de julio de 2005, a fin que el mismo presente las consideraciones que estime pertinentes. En tal sentido, el ETOSS por nota 022435 del 4 de agosto de 2005 presentó el descargo realizado al citado proyecto.

Sobre la base de lo expuesto la AGN arriba a las siguientes conclusiones:

El ETOSS en el año 2001 implementó el PTS, el cual consiste en un subsidio para ayudar a aquellos usuarios que presentan problemas para realizar el pago del servicio de agua y cloacas.

El citado programa es coordinado y controlado por el ente regulador quien juntamente con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y cada uno de los 17 municipios que integran la Concesión, otorgan el beneficio.

Durante la etapa de implementación y desarrollo del Programa no se realizó la difusión sostenida del mismo, de manera de dar a conocer a los usuarios los beneficios que se otorgan, a quiénes se intenta beneficiar y por qué.

Los subsidios otorgados en concepto de Tarifa Social en el periodo 2001 a 2004 fueron significativamente menores a los previstos por el acta acuerdo del 9 de enero del año 2001. Éstos alcanzaron el equivalente a 332.370 módulos, representando apenas el 55 % de los 605.333 módulos disponibles en ese periodo.

Asimismo, los beneficiarios del Programa percibieron una porción muy reducida de los fondos provisionados con este fin por AASA. Los descuentos

realizados en la factura de los usuarios sumado a lo erogado en concepto de planes de pago destinados a regularizar la deuda que los usuarios mantenían con la empresa al momento de su incorporación al programa en el periodo 2002-2003, alcanza sólo el 17 %.

Por otro lado el ETOSS ha reglamentado el "caso social" con un atraso de tres años y seis meses; y presentó una demora de aproximadamente de nueve meses respecto a lo dispuesto en el inciso j) del acta acuerdo suscrita el 9 de enero de 2001.

Si bien el Ente Regulador manifiesta haber desarrollado tareas inherentes al Foro de Participación, cuya constitución se encuentra prevista en la normativa vigente, el mismo, a la fecha, no ha sido constituido formalmente.

Los Convenios suscritos entre el ETOSS y los municipios tienen por objeto establecer la modalidad de participación y la responsabilidad de estos últimos en lo que respecta a la selección e identificación de los beneficiarios de la Tarifa Social. De esta manera cada jurisdicción debe realizar el acto administrativo de asignación e integración correspondiente. Respecto de este tema sólo el GCBA y Lomas de Zamora han cumplido; los demás incumplieron esta norma.

El Ente Regulador tampoco ha reglamentado las modificaciones introducidas a los procedimientos relativos a que "Los listados deben ser remitidos con la firma del responsable del área ejecutora y con el correspondiente soporte magnético" ni ha previsto, en función de esas modificaciones, medidas que resguarden la información remitida por las jurisdicciones. A la fecha de cierre de tareas de campo el circuito que se está realizando es informal.

Respecto al tema de auditorías que el Ente debe realizar, sólo se han efectuado controles aleatorios de manera informal y sin informe escrito. Asimismo las actividades de capacitación y asistencia llevadas a cabo por el Equipo Técnico a los municipios no han arrojado el resultado esperado. Esta situación no fue advertida por el Ente, atento la ausencia de controles pertinentes respecto del desenvolvimiento del Programa.

Respecto de los "casos de excepción" se han otorgado beneficios sin estar debidamente fundamentados. Es así que sobre los 543 casos analizados en ningún caso se encontró el Informe socioambiental. Tampoco se aplica un criterio uniforme para registrar los datos correspondientes.

Por último con relación a la documentación que remiten los municipios al Ente Regulador, referida a las Instituciones que ingresan al Programa no se encuentra debidamente archivada, situación que además de dificultar su individualización facilita el extravío de la misma.

Asimismo en base a lo expuesto la AGN realiza las siguientes recomendaciones:

Teniendo en consideración los comentarios y las observaciones realizadas, es menester realizar las siguientes recomendaciones:

1. El Ente deberá establecer y reglamentar una metodología de difusión masiva y sostenida del PTS, la cual deberá estar dirigida a todos los usuarios del servicio concesionado, sin distinción alguna (Cde. Obs. 4.1).

2. El Ente deberá realizar una adecuada coordinación y supervisión del desenvolvimiento del PTS, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra orientado a asistir a la población más vulnerable desde el punto de vista económico (Cde. Obs. 4.2 y 4.3).

3. El Ente deberá, en lo sucesivo, arbitrar los medios necesarios a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma con la implementación y reglamentación de aspectos que son de su competencia (Cde. Obs. 4.4, 4.5 y 4.6).

4. El Ente deberá exigir a los municipios, el estricto cumplimiento de la normativa vigente y de los convenios suscritos y, en caso de corresponder, introducir las modificaciones necesarias para adaptarlos a la dinámica del programa. (Cde. Obs. 4.7 y 4.8).

5. El Ente deberá programar y ejecutar auditorías con relación al desenvolvimiento del PTS, con el fin de asegurar que el mismo llegue a quien más lo necesite y se otorgue en tiempo y forma (Cde. Obs. 4.9).

6. El Ente deberá encarar, en lo sucesivo, la capacitación y asistencia de las jurisdicciones, de modo que las mismas permitan alcanzar los objetivos para los cuales fueron implementadas (Cde. Obs. 4.10).

7. El Ente deberá implementar un sistema que asegure el resguardo de la información que remiten las jurisdicciones a efectos de atribuir confiabilidad en el registro y comunicación a la concesionaria de los listados de beneficiarios, teniendo permanentemente actualizada su base de datos (Cde. Obs. 4.11).

8. El Ente deberá realizar un estricto control de la actuación de las distintas jurisdicciones, en lo que hace al otorgamiento y renovación de los beneficios. (Cde. Obs. 4.12, 4.13 y 4.14).

9. El Ente deberá cumplir estrictamente con lo dispuesto en la resolución ETOSS 10/03, con relación a las instituciones que son incorporadas al Programa. (Cde. Obs. 4.15).

10. El Ente deberá implementar un adecuado sistema de archivo de la documentación remitida por las jurisdicciones y referida a las instituciones que se incorporan al PTS (Cde. Obs. 4.16).

*Heriberto A. Martínez Oddone.*

#### ANTECEDENTES

Ver expedientes 8.663-D.-2010 y 350-OV-2005.